

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Por sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-2434-2020, se rechazaron las excepciones de caducidad de la acción de despido indirecto y nulidad del despido promovida y de prescripción de las acciones de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Además, se acogió la demanda interpuesta por don Rodrigo Vergara Fernández en contra la empresa Gradozero Inversiones y Producciones Ltda., declarando que la demandada incurrió en la causal prevista en el N° 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, debiendo pagar al demandante la indemnización sustitutiva de aviso previo; la indemnización por años de servicios; el recargo contemplado en el artículo 171 del Código del Trabajo; las remuneraciones insolutas; el feriado legal y proporcional; las cotizaciones previsionales, salud y cesantía por los períodos insolutos.

Asimismo, se rechazó la excepción de compensación promovida por la demandada, como la demanda reconvencional promovida por esa parte, con costas.

Contra esa sentencia, la parte demandada interpuso recurso de nulidad, basado en las causales subsidiarias de los artículos 478 letra e) en relación con el artículo 459 N°4; 478 letra b) y 478 letra d), todas del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como primera causal de nulidad se invoca la prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 N° 4, del mismo texto legal, por la omisión del análisis de toda la prueba rendida, los hechos que se estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.

Argumenta que en el desarrollo de los hechos relativos al término de la relación laboral, el tribunal incurre en gruesos y severos



errores, por cuanto la demandada sostuvo desde la contestación de la demanda que el término de la relación laboral se produjo por la causal contemplada en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, esto es, el caso fortuito o fuerza mayor, el día 12 de diciembre de 2019 a partir del día 31 de diciembre de 2019 y no el día 31 de diciembre de 2020 como quedara plasmado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, y de otro lado el trabajador afirma y sostiene que el término de la relación laboral se habría producido el día 27 de enero de 2020, a través del auto despido.

Sostiene que su parte incorporó la prueba documental ofrecida en la audiencia preparatoria, acompañándose al efecto tanto la minuta de prueba respectiva como los documentos digitalizados, los cuales, constan en la carpeta electrónica, documentos que son a saber, los siguientes: a) Copia de Balance General Tributario de Grado Zero Ltda. del año 2019; b) Recepción de carta despido enviada a Jorge Vaccaro Vaccaro representante de la demandada de autos por el demandante de autos con fecha 27 de Enero de 2020; c) copia de carpeta tributaria electrónica de Grado Zero Ltda.; d) Certificado de estado financiero de Grado Zero Ltda. y carta aviso enviada a la demandante por Grado Zero Ltda. de fecha 12 de diciembre de 2019 y agrega que este último documento a pesar de haber sido incorporado en la audiencia de prueba, no quedó consignado en los documentos incorporados como se describen en el considerando quinto de la sentencia recurrida.

Añade que sin perjuicio que su parte no comparte con el juzgador el razonamiento sostenido por aquel, referente a la falta de prueba del hecho del despido, se podrá argumentar que el despido pueda ser nulo, pero, mientras esto no sea declarado judicialmente es plenamente válido, máxime, si aquel cuenta con el respaldo de un documento público, cual es, es el emanado de la respectiva inspección del trabajo, documento que no fue objetado en tiempo y forma por el actor.

Indica que en el análisis del despido indirecto formulado por el actor a la demandada, reviste dos grandes problemas respecto a su validez: la primera es que el sentenciador señala erradamente que fueron cumplidas con las exigencias y requisitos de los artículos 172 y



162 ambas disposiciones del Código del Trabajo, puesto que de una parte la comunicación del demandante al representante de la demandada Jorge Vaccaro Vaccaro se dirigió a su domicilio particular en forma personal a él y no a la empresa ni el domicilio de aquella, no se acreditó por aquella que la carta en cuestión haya sido dirigida al domicilio consignado en el contrato puesto que no fue acompañado en tiempo y forma, ni tan siquiera ofrecido como prueba documental el contrato de trabajo y sus anexos correspondientes, tampoco fue acreditada el texto de la carta enviada por el actor y por último, la demandante al incorporar la carta de despido indirecto esta expresa de en modo futuro condicional que le pondría termino al contrato de trabajo, no que ponía termino al referido contrato.

Menciona que respecto a la confesional solicitada por la demandada respecto al representante de la demandada Jorge Vaccaro Vaccaro fue indicado tanto por su parte como por la propia demandante el correo electrónico y teléfono móvil de este último, sin que llamado a absolver posiciones existiera comunicación con él, cuestión que fue alegada oportunamente por su defensa, en orden a la probable débil o nula conexión de internet para conectarse a la audiencia por la plataforma de Zoom, existiendo en la especie sendas instrucciones de la Excma Corte Suprema así como el acuerdo de pleno de octubre de 2020, al respecto, causando en este aspecto, indefensión, o al menos una afectación a la defensa.

Añade que el tribunal pudo intentar llamar al teléfono móvil del citado a absolver posiciones, encontrándose obligado al llamado de rigor, de modo tal que la circunstancia de haberse hecho aplicable el apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo respecto a no haberse exhibido los documentos que solicitara el actor, no supe la circunstancia de no haber sido señalada en la demanda ni en la audiencia preparatoria el domicilio señalado en el contrato, lugar de desarrollo del trabajo, condiciones del trabajo, etc, y por último en lo que respecta a la absolución de posiciones de Jorge Vaccaro Vaccaro en representación de Grado Zero Ltda., en lo que respecta al apercibimiento del artículo 454 N° 3 del Código del Trabajo, esto no es aplicable de una parte por la alegación de afectación a la defensa y de otra parte que no supe de modo alguno respecto a las falencias



contenidas en la demanda misma, no pudiendo ser aquella modificada posterior a su notificación; más aun, respecto al pliego de posiciones este debió haber sido acompañado en la audiencia correspondiente fuere en forma física o bien en formato PDF encriptado debidamente, para que producido el llamado se produjere su apertura, lo cual, no ha ocurrido en la especie, no constando aquello en la carpeta digital.

Afirma que en lo que respecta a los WhatsApp tanto del teléfono móvil de Jorge Vaccaro Vaccaro como de Lucía Duarte Imbert, cuyas copias acompañadas fueron impugnadas tanto por falta de integridad como también por no haber sido acompañadas en la forma debida, dado que debieron ser transcritos para acreditar su autenticidad, respecto de lo cual, formo parte de un debate que no existe constancia en la sentencia pronunciada en estos autos.

Indica que respecto a los testigos aportados por su parte, y particularmente por el testigo Rodrigo Espinoza Arraza, quien reside en San Diego, estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, fue alegado oportunamente entorpecimiento dado que este último presentaba problemas severos de conexión para declarar en la audiencia de juicio y por las normas sanitarias tanto estatales como Federales del país de su residencia, impedían su pronto regreso a Chile, requiriendo de una parte tanto un test negativo de Sars-CoV-2 o Covid 19 como arribado a Chile que este fuere el guardar una cuarentena obligatoria preventiva de 14 días, siendo desechado dicho entorpecimiento y la reposición deducida en su contra, causando a esta parte afectación a su defensa, infringiendo derechos fundamentales a la misma.

Señala que en cuanto a la excepción de incompetencia opuesta por la demandante debió haber sido resuelta en la audiencia preparatoria, todo ello, por mandato legal en virtud de lo prevenido por el artículo 453 inciso 4° del Código del Trabajo, agregando que lo resuelto por el tribunal en la sentencia impugnada, se excede, en cuanto a lo pedido en el siguiente aspecto.

Añade que, al rechazar la demanda reconventional opuesta por su parte, confunde las cosas, puesto que lo que se exige en la especie no es que el trabajador demandado tenga la calidad de



acreedor, sino que por el contrario debe tener la calidad de deudor a objeto que sea aplicable la institución de la compensación. Luego en la demanda de autos, se expresa por la demandante que se le deben los meses de noviembre y diciembre de 2019, lo cual queda plasmado en la redacción de la carta de despido indirecto, en que expresamente se dice que se encuentran impagos los aludidos meses de noviembre y diciembre de 2019, de manera tal, que mal puede mandarse pagar los días trabajados del mes de enero de 2020, cuando el propio actor no lo solicita, comunicando a su representada que pondría termino al contrato de trabajo que ligaba a las partes con fecha 27 de enero de 2020, no significando que había trabajado hasta ese día.

En último lugar, al rechazar la demanda reconvencional, condena en costas a su representada, regulando, acto seguido, por concepto de costas la suma de \$200.000, debiendo corresponder dicha regulación al juez del juzgado de cobranza en su caso y no se pronunció respecto a las costas respecto a la excepción de prescripción, la cual, fuera desechada fuera del plazo legal que el juzgador tenía para hacerlo.

Concluye que, si bien es suficiente para declarar la nulidad de la sentencia la falta del elemento “análisis de toda la prueba rendida”, la trascendencia de la que ha omitido el sentenciador no puede sino determinar que la sentencia es nula en razón de la antijuricidad con que se ha procedido a dictar sentencia, estando entonces en la hipótesis del artículo 478 letra e) para declarar que la sentencia es nula.

SEGUNDO: Que, como causal subsidiaria, se invoca la prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por dictación de la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Sostiene que se aprecia tanto en los considerandos de la sentencia impugnada como en la parte conclusiva o resolutoria, que existen contradicciones que hacen ver las premisas lógicas y las máximas de la experiencia, a saber, si en la demanda de autos se expresa que se adeudan los meses de noviembre y diciembre de



2019 y nada se dice respecto al mes de enero de 2020, lo propio se desprende de la carta enviada por el actor que consigna idéntica expresión respecto al mes de enero de 2020, expresando el actor que pondrá termino al contrato que lo unía con la empresa demandada el día 27 de enero de 2020, coetáneo con lo anterior, el juzgador tiene por cumplido los requisitos de los artículos 162 y 172 del Código del Trabajo respecto al envío de la carta por el actor al domicilio señalado en el contrato, cuando, no fue acompañado por el demandante el referido contrato, de manera tal que no existía antecedente alguno que permitiera establecer dicho requisito, todo lo contrario, la carta fue enviada al domicilio particular del representante de la demandada, como se alegó oportunamente por su parte, en consecuencia se encuentran ausentes los fundamentos y razonamientos de las máximas de experiencia, fundamentos y premisas lógicas, que llevan a la conclusión univoca que las normas de la sana critica han sido vulneradas y violentadas, llegando a conclusiones contradictorias plasmadas y contenidas tanto en el considerando quinto de la sentencia impugnada como en la parte resolutive de dicha sentencia.

TERCERO: Que, como causal subsidiaria, la recurrente invoca la contemplada en el artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, esto es, cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre intermediación.

Expone que en el caso de autos habiéndose realizado la audiencia de juicio con fecha 7 de diciembre de 2020, correspondiendo dictar sentencia el día 28 de diciembre de 2020, sin embargo, la misma, se dictó con fecha 27 de enero de 2021.

Añade que la demora en la dictación de la sentencia laboral, además de constituir una dilación indebida para toda parte que reclama derechos ante la jurisdicción, es un quiebre del principio de la intermediación.

Explica que la intermediación es un principio recogido expresamente en el código laboral en los artículos 427 y 460, agregando que es uno de los que forman la columna vertebral del nuevo proceso laboral de audiencia, con la oralidad, concentración, publicidad entre otros.

Sostiene que la actitud que debe asumir el juez que dirige el

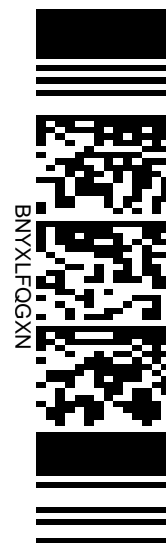


debate en el juicio oral, exige el contacto directo con las pruebas y partes que intervienen en esa fase, y esta presencia personal exigida por el legislador -inmediación- no se termina en la audiencia del juicio donde se rinden las pruebas, va más allá y se manifiesta en la dictación de la sentencia, acto procesal de la mayor importancia en todo ordenamiento jurídico por cuanto ella además de decidir el conflicto, expondrá las razones que exige el legislador para apreciar la prueba.

Indica que la nulidad por falta de inmediación es de carácter formal, su mera ocurrencia, constatada que sea es casual de nulidad, por estar contemplada expresamente y en consecuencia, corresponde se anule la sentencia por infracción al principio de inmediación.

CUARTO: Que, en relación con la primera causal invocada, ha de recordarse que las exigencias del artículo 459 del Código del Trabajo tienen un carácter primordialmente formal. Lo que se quiere significar es que, primariamente, constituyen una condición de existencia, que buscan asegurar que esos requisitos estén presentes en el fallo y que lo estén de un modo tal que permita conocer las razones en que se apoya la decisión, porque de esa manera se legitima lo resuelto, se posibilita su impugnación y el eventual control posterior, siempre que sea propiciado por los medios y en la forma que la ley franquea a quien pretenda esa revisión.

QUINTO: En la especie, resulta que la sentencia impugnada contiene la fundamentación que el recurrente echa en falta. Como demostración suficiente de ello se establece en la motivación sexta, párrafo séptimo en forma clara y explícita – al razonar el señor juez del grado en el sentido que: *“En la especie, no cumpliendo la demandada con las formalidades para poner término al contrato de trabajo, desde que no se acreditó el envío de carta de despido al trabajador, ni siquiera la existencia de la misiva, malamente el tribunal puede entender que existió un despido en la fecha que la empresa indica, sin que pueda desvirtuar dicha aseveración el comprobante de envío de carta generado por la Inspección del Trabajo, desde que el referido instrumento no da cuenta del resto del cumplimiento de las formalidades que el artículo 162 del Código*



Laboral exige, sin que tampoco se haya esgrimido por la empresa la existencia de un despido verbal ocurrido en la data que indica, sin perjuicio que no se acompañó antecedente alguno que dé cuenta de esa circunstancia.”

SEXTO: Pues bien, el caso que nos ocupa, la recurrente ha indicado que el motivo de nulidad es el establecido en los artículos 478 literal e) en relación con el artículo 459 N°4 del Estatuto Laboral, olvidando que la causal aplicable es la del artículo 477 segunda hipótesis del mentado código, es decir, infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, esto es, debió haber denunciado, el precepto del artículo 162 del mencionado cuerpo de leyes que, en su inciso 1° establece que: *“si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159...deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda”,* agregando en su inciso 2°, que: *“Esta comunicación se entregará o deberá entregarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 6 del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles.”*

En este sentido, entonces, las alegaciones del recurrente debían ir dirigidas a que el juzgador se equivocó en aplicar el mencionado artículo 162 y que en la especie si se cumplieron por la parte demandada las formalidades que estatuye la aludida disposición, en los términos señalados precedentemente, lo que en autos no aconteció

En consecuencia, esta disposición –artículo 162- es la norma decisoria litis que debió ser denunciada como infringida en el recurso, motivo suficiente para inferir que la causal alegada en lo principal no influye, en modo alguno, en lo dispositivo del fallo, debiendo rechazarse el recurso deducido por la parte demandada.

SÉPTIMO: Que, para que prospere la segunda causal subsidiaria alegada por el recurrente, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas



de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

OCTAVO: Como se puede colegir del arbitrio, respecto del primer supuesto, esa condición no concurre en la especie, pues el impugnante se limita a discrepar del fallo y a formular su propia apreciación de la prueba rendida, criticando el raciocinio valorativo que hace de base en el considerando séptimo, en el cual concluye que la demandada no cumplió con las formalidades para poner término al contrato de trabajo, *“por lo que malamente se puede entender que existió un despido en la fecha que la empresa indica.”*

Como puede advertirse, el sentenciador hace uso de su facultad privativa de valorar la prueba, atribución que la ley no le concede al litigante, razón por lo cual el primer supuesto antes referido no se cumple en la especie.

En cuanto al segundo requisito, el recurso tampoco lo satisface, pues solo alude en forma genérica a que en la sentencia existen contradicciones que hacen ver las premisas lógicas y las máximas de la experiencia, sin detenerse a precisar de qué forma se produce esa contradicción, es decir, no le otorga el debido contenido fáctico y jurídico a su alegación.

En razón de lo anterior la causal en comento deberá ser rechazada.

NOVENO: Que como última causal subsidiaria el recurrente alega la contemplada en el artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, esto es, cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación, por cuanto, en el caso de autos habiéndose realizado la audiencia de juicio con fecha 7 de diciembre de 2020, correspondiendo dictar sentencia el día 28 de diciembre de 2020, sin embargo, la misma, se dictó con fecha 27 de enero de 2021.

DÉCIMO: Que se desestimaré la mentada causal desde que fue el mismo adjudicador que estuvo presente en el juicio, percibiendo y luego valorando la prueba presentada por las partes, el



que dictó la sentencia que se recurre, por lo tanto, en esta parte de la alegación, no se avizora infracción alguna al principio de inmediación, lo que conduce a la postre a rechazar el arbitrio es tu totalidad.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-2434-2020, sentencia que, en consecuencia, no es nula.

En razón del actuar temerario del recurrente se fijan las costas del recurso en la suma de \$ 300.000.-

Regístrese y comuníquese.

Redactó el ministro (s) Alejandro Aguilar.

Laboral-Cobranza N° 469-2021.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por los ministros suplentes señor Alejandro Aguilar Brevis y señor Guillermo Rodríguez González, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber expirado su suplencia.

En Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Ministro Suplente Alejandro Aguilar B. Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.